ECUADOR

El Ecuador es una república constitucional con una población de unos 14,6 millones de habitantes. En septiembre de 2008, el electorado aprobó una nueva constitución por referendo, la cual entró en vigor en octubre de ese año, aunque muchas de sus disposiciones continuaban todavía siendo implementadas durante el año. El 26 de abril, Rafael Correa volvió a ganar la presidencia por un mandato de 4 años, como resultado de las elecciones que, en términos generales, fueron consideradas libres y justas. En general, las autoridades civiles retuvieron el control efectivo de las fuerzas de seguridad.

Si bien, en general, el Estado respetó los derechos humanos de sus ciudadanos, continuaron los problemas en los siguientes campos: actos aislados de homicidio y uso de fuerza excesiva por las fuerzas de seguridad, a veces con impunidad; condiciones precarias en las cárceles; arrestos y detenciones arbitrarios; corrupción y otros abusos por parte de las fuerzas de seguridad; un alto número de detenciones previas al juicio; y corrupción y denegación de las garantías procesales dentro del sistema judicial. El presidente y sus funcionarios continuaron con ataques legales y verbales contra los medios de comunicación independientes. Continuaron los problemas sociales, entre los que cabe citar la violencia contra las mujeres; la discriminación de las mujeres, los pueblos indígenas, los afroecuatorianos, además de las personas por su orientación sexual; la trata de personas y la explotación sexual de menores; y el trabajo infantil; a pesar de las disposiciones constitucionales y algunas medidas favorables del gobierno en estas cuestiones.

RESPECTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Sección 1. Respeto de la integridad de la persona, incluida la protección contra:

a. La privación arbitraria o ilícita de la vida

Aunque ni el gobierno ni sus agentes cometieron homicidios por motivos políticos, se siguieron recibiendo denuncias de fuentes

fidedignas de que las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva y cometieron algunos homicidios.

El 25 de abril, la policía presuntamente disparó contra Carlos Songs, Oswaldo Chávez y Walter Ávila Murillo, matando a los tres, después de haberlos perseguido desde el club nocturno El Puente en la provincia de Manabí. Según una cuarta víctima que escapó ilesa, el grupo supuso que los agresores eran ladrones; nunca se identificaron como agentes de policía. El 16 de noviembre, el fiscal determinó que no había suficientes pruebas para enjuiciar a los agentes de policía y solicitó que el caso fuera desestimado.

En diciembre de 2008 los cuerpos de tres hombres fueron hallados dentro de un automóvil en Manta. Una de las víctimas era Yandry Vélez, quien presuntamente se había refugiado en Manta para esconderse de Diego Erazo, Jefe del Grupo de Apoyo Operacional de la Policía Judicial de Pichincha. La familia afirmó que la policía mató a Vélez y sus amigos siguiendo órdenes del alcalde. Esta investigación seguía en curso al finalizar el año.

Por falta de pruebas, un tribunal policial no vio el caso que ocurrió en enero de 2008, en el cual la policía presuntamente disparó contra dos hombres, uno de ellos un colega policial, matándolos sin haberlos interrogado.

En febrero el fiscal en Esmeraldas liberó a los tres agentes de policía que participaron en el incidente de mayo de 2008, en el cual la policía arrestó a Klever Arce Toro, un conscripto militar fuera de servicio que fue encontrado muerto tres días después. El Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional no encontró que los agentes fueran responsables de la muerte de Arce.

El 8 de diciembre, el juez determinó que no había suficientes pruebas para condenar a los acusados que formaban parte de una turba que en abril de 2008 linchó y quemó vivos a dos colombianos que presuntamente habían matado a un residente local durante un intento de robo en San Vicente, provincia de Manabí, y el caso fue cerrado.

Se esperaba que la comisión presidencial creada en 2007 para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridos durante el gobierno de León Febres Cordero (1984 a 1988) y en otros períodos emitiera un informe final en septiembre, pero al finalizar el año no se había emitido dicho informe. En un informe preliminar filtrado a la prensa a principios de septiembre se estipulaba que de 150 casos investigados, la comisión encontró 87 casos de violaciones de derechos humanos.

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) informó que la violencia de turbas contra presuntos delincuentes continúa en igual medida que el año pasado, especialmente en comunidades indígenas y barriadas de las grandes ciudades, que cuentan con poca presencia policial. El 30 de octubre en Cayambe, provincia de Pichincha, una turba de mujeres indígenas atacó al director de educación bilingüe e intercultural, lo empaparon con una manguera y le tiraron ortigas. Las mujeres supuestamente gritaron que le estaban "aplicando la justicia indígena" porque era miembro del "gobierno de Rafael Correa" y no les permitía reunirse en la escuela local después del horario escolar.

b. Desapariciones

No hubo ningún informe sobre desapariciones motivadas por razones políticas.

El secuestro criminal con fines de lucro siguió constituyendo un problema en algunas regiones del país. También se recibieron denuncias de extorsión y amenazas de secuestro de ganaderos, agricultores y empresarios a lo largo de la frontera con Colombia. Durante el año la policía registró 28 casos de secuestros y 347 de "secuestros exprés" (en los cuales la víctima es conducida a varios lugares y forzada a retirar fondos personales de los cajeros automáticos), frente a 354 casos de secuestros y 143 "secuestros exprés" en 2008.

c. Tortura y otro trato o castigo cruel, inhumano o degradante

Si bien la constitución y las leyes prohíben la tortura y formas similares de intimidación y castigo, se informa que algunos

agentes de policía sometieron a sospechosos y presos a tortura y abuso, a menudo con impunidad.

La nueva constitución declara ilegal "cualquier forma de tortura"; el código de procedimiento penal contiene una disposición similar y el código penal sanciona a las autoridades y los miembros de la policía estatal o los militares que usen la tortura para forzar confesiones. La Procuraduría General de la República encontró información sobre presuntos torturadores encarcelados, pero clasificó estos casos como "crímenes contra la vida" y no como "tortura". Esas personas a menudo fueron multadas en lugar de encarceladas.

En abril los fiscales empezaron a investigar a siete agentes de policía que supuestamente torturaron a tres sospechosos durante un robo en un centro comercial que ocurrió en marzo de 2008. Se retiraron todas las acusaciones contra los presuntos ladrones, y la investigación sobre las acciones de los agentes de policía seguía en curso al finalizar el año.

Al 18 de diciembre, la CEDHU registró 67 casos de presunta "tortura" o "agresión física injustificada" por fuerzas de la policía.

En junio la policía encarceló a José Elías Barberan Queirolo, de 18 años de edad, por matar a un hincha después de un partido de fútbol en Quito. Después de ser arrestado, sostuvo que la policía lo llevó a una habitación, le vendó los ojos y le obligó a arrodillarse mientras lo golpeaban en el cuello y la cabeza. Barberan alegó que la policía quiso forzarlo a confesar la autoría de un crimen que no cometió. El 10 de julio, el tribunal liberó a Barberan; nunca se presentaron acusaciones formales contra él.

En junio dos agentes de policía se acercaron a cinco estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, entre los que estaban Paul Trujillo y Fernando Muñoz, y trataron de detenerlos. Los estudiantes se resistieron al arresto y la policía pidió refuerzos. La policía recurrió a la fuerza para meter a los estudiantes en los vehículos policiales, los atacó físicamente y

los liberó una hora más tarde. Los estudiantes presentaron una denuncia, pero al finalizar el año aún no había respuesta.

La fiscalía supuestamente encontró pocas pruebas en el incidente de enero de 2008 en el que el agente de policía Fernando Santiago Moreno Charro, acompañado de otros agentes, entró en la Universidad Politécnica Salesiana y presuntamente hirió a la estudiante Nadia Cristina Traslavina Bossano debido a desavenencias personales con la hija de Moreno. La ley de prescripción en este caso venció en enero.

El 1 de abril, el Tribunal Penal de Pichincha ordenó una investigación sobre los agentes de policía que en marzo de 2008 participaron en Quito en el caso de tres hombres que alegaron que la policía los arrestó por intento de robo, los detuvo por posesión ilegal de armas y los torturó para forzarles a confesar que habían participado en el robo. Las autoridades le prohibieron salir del país al jefe de policía presuntamente involucrado en el caso. La corte absolvió de todos los cargos a los tres hombres acusados de robo.

Un juez policial reconsideró el caso de una golpiza policial en 2007 a Víctor Javier Tipán Caiza, de 16 años, y desestimó el caso por falta de mérito después de una investigación policial interna de dos agentes.

Condiciones en las cárceles y los centros de detención

Por lo general, las condiciones en las cárceles y los centros de detención fueron precarias y tendían a ser peores en las zonas costeras tropicales que en las zonas altas templadas.

El hacinamiento fue un problema crónico en la mayoría de las instalaciones penales, aunque el número de detenidos bajó marcadamente debido a un perdón presidencial que liberó a millares de personas que cumplían sentencias por tráfico de drogas en cantidades menores de dos kilogramos de narcóticos, o si habían estado encarceladas por más de 12 meses sin juicio previo. La disminución también reflejó el trabajo de una fiscalía pública temporal que contrató a más de 150 abogados para defender a los presos pobres, especialmente aquellos que

esperaban ser juzgados. Al mes de diciembre, la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS) informó que había 10.808 presos en 45 establecimientos cuya capacidad máxima era de 7.527 reclusos, una disminución de un total de 17.201 el año anterior.

Varias prisiones registraron graves brotes de enfermedad, y a menudo la atención médica fue inadecuada. La asignación diaria para las raciones de la prisión era de un dólar por preso (el dólar estadounidense es la moneda oficial); los reclusos a menudo complementaron las raciones comprando sus propios alimentos. La DNRS informó que seis prisioneros murieron en el año; número inferior a las 21 defunciones ocurridas en 2008.

Un juzgado absolvió a dos agentes de policía acusados en 2007 de la muerte de Juan Lorenzo Delgado Zambrano, quien murió en el hospital presuntamente después de haberse peleado con otro detenido en la comisaría local. La familia de Delgado no contaba con recursos para contratar a un abogado y se vio forzada a dejar la investigación en manos de la fiscalía.

Las condiciones eran notablemente mejores en la cárcel de mujeres de Quito que en los presidios de hombres. No había adolescentes ni niños mayores de tres años de edad viviendo con sus madres encarceladas; para los menores de tres años, que no pueden ser separados de sus madres, había guarderías instaladas dentro de los centros de detención. Las personas en prisión preventiva convivían con las reclusas condenadas. Según la CEDHU, se asignaba a guardas varones la responsabilidad de cuidar a las reclusas y ellas declararon que los guardas las golpeaban y las acusaban de tratar de escaparse.

Aunque en la mayoría de los casos el gobierno permitió que los observadores independientes de instituciones de defensa de los derechos humanos visitaran las cárceles, a veces las autoridades no permitieron que esos observadores visitaran a los presos que estaban incomunicados después de haber sido presuntamente golpeados. La Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS) declaró que todos los funcionarios y representantes adecuadamente identificados de las organizaciones no gubernamentales (ONG) pudieron visitar a los presos; no obstante, muchas veces los observadores y las autoridades no

pudieron encontrar a los reclusos debido a registros mal llevados y a la corrupción de los funcionarios de prisiones.

d. Arresto o detención arbitrarios

Si bien tanto la Constitución anterior como la actual prohíben el arresto o la detención arbitrarios, en 2006 el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias señaló que las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, el Código Penal y algunos reglamentos adoptados por las autoridades centrales o provinciales "socavan las garantías y la protección ofrecidas". Una ley interpretativa, aprobada por el congreso en 2007, estipula que los detenidos que intencionalmente demoren el proceso judicial no pueden beneficiarse de la disposición constitucional que limita el plazo de detención preventiva. Sin embargo, los juzgados en lo penal no aplicaron esta interpretación en forma pareja en el territorio nacional.

La ley estipula que las embarazadas no pueden estar detenidas en penitenciarias antes de ser llevadas a juicio, aunque las que están embarazadas o quedan embarazadas después de la sentencia deben permanecer encarceladas. Sin embargo, según las ONG confiables, las fuentes policiales y los informes de prensa, muchas mujeres embarazadas fueron encarceladas en lugar de cumplir arresto domiciliario durante el período mencionado.

Función de la policía y el aparato de seguridad

La Policía Nacional está subordinada a la autoridad del Ministerio de Gobierno. La eficacia de la Policía Nacional se vio perjudicada por la corrupción, la deficiencia en los procedimientos de contratación y la falta de adiestramiento, supervisión y recursos. La declaración de estado de emergencia por el Presidente Correa para varios sitios en octubre de 2007, que tuvo una duración de seis meses, continuó suministrando a la Policía Nacional un alto nivel de recursos. Los contactos policiales señalaron que habían recibido unos \$160 millones adicionales al mes de agosto para combatir la criminalidad y mejorar la seguridad de los ciudadanos. El 30 de septiembre, Correa declaró un "estado de excepción" de 60 días en las

ciudades de Quito, Guayaquil y Manta, permitiendo que las fuerzas militares asistieran a la policía en el control de la criminalidad. La Corte Constitucional confirmó el decreto el 2 de octubre y el gobierno posteriormente lo extendió hasta finales de diciembre.

Algunos municipios, como Quito y Guayaquil, tienen sus propias fuerzas de policía metropolitana, además de la Policía Nacional. Guayaquil cuenta también con un departamento municipal aparte de policía de tránsito. Una oficina de asuntos internos de la policía investiga denuncias contra agentes de policía y puede remitir casos a los tribunales de la policía. Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) alegaron excesos esporádicos en el uso de la fuerza por parte de algunos agentes de la policía metropolitana de Quito y Guayaquil. En ciertas ocasiones, la corrupción policial fue problemática. La Policía Nacional contrató a algunas ONG para proporcionar adiestramiento sobre cuestiones de los derechos humanos.

Procedimientos de arresto y trato durante el período de detención

La ley exige que las autoridades expidan órdenes de arresto específicas por escrito antes de la detención, y las autoridades deben presentar cargos por un determinado delito penal contra el sospechoso en las 24 horas siguientes a su arresto. Dentro de las 24 horas siguientes al arresto, los detenidos pueden cuestionar la legalidad de su detención por medio de una petición de habeas corpus interpuesta ante un juez en la localidad donde la detención tuvo lugar. La constitución estipula que un preso puede quedar en libertad sólo por una orden judicial.

Por carecer de méritos, el fiscal desestimó el caso de arresto de Manuel Xavier Cornejo Delgado en Manta, en 2007, quien alegó haber sido arrestado y dejado incomunicado por dos semanas.

Se permite fijar una fianza solamente en el caso de delitos punibles con penas de prisión de menos de 5 años, y se prohíbe en casos de delitos por intolerancia, delitos sexuales y de violencia doméstica y aquellos que el juez considere que pueden sembrar pánico en la población.

Si bien la ley concede a los detenidos el derecho de acceso inmediato a abogados y familiares, hubo demoras según las circunstancias y la disposición de los agentes de aplicar la ley; los presuntos narcotraficantes a menudo esperaban de 24 a 48 horas a que se realizaran esas visitas. Los detenidos, que tenían suficientes recursos, sobornaban a las autoridades carcelarias para que les facilitaran el acceso. La CEDHU informó que un número no precisado de reclusos se encontraba en instalaciones donde no se permitían las visitas de familiares ni de abogados.

Aunque la ley prohíbe la detención en régimen de incomunicación, las organizaciones de defensa de los derechos humanos siguieron denunciando violaciones esporádicas. Las autoridades responsables de decidir sobre la validez de las detenciones a menudo permitían la elevación de acusaciones frívolas, ya sea sobrecarga de trabajo o porque el acusador los sobornaba. A menudo se usó el sistema como medio de acoso en casos civiles, en que una parte buscaba el arresto de la otra con acusaciones penales.

La detención, desde la investigación hasta el juicio y mientras dure este último, es legal si un juez determina que es necesaria y si se presentan pruebas de que se ha cometido un delito. La ley limita la detención inmediata a 24 horas por *in flagrante delicto* o para permitir que comience la detención durante la fase de investigación. En la mayoría de las jurisdicciones, la detención inmediata suele ser mucho más prolongada. Si el informe de la investigación no es favorable, el juez puede ordenar la detención preventiva, por un plazo límite de seis meses por delitos menores y un año por delitos mayores.

La ley limita el período que los presos pueden estar detenidos después de formular acusaciones formales pero antes de expedir una condena o sentencia a seis meses en el caso de delitos menores (aquellos penados con "encarcelamiento correccional") y un año en el caso de delitos mayores. Sin embargo, las autoridades eludieron reiteradamente esta disposición presentando nuevas acusaciones antes de que venciera el plazo. La mayoría de los acusados permanecen encarcelados durante la fase de investigación. Según la información pública, al mes de diciembre, estaban pendientes las sentencias de aproximadamente

el 52 por ciento de los detenidos, de los cuales el 70% correspondía a casos presentados en los seis meses anteriores.

e. Denegación de juicio público imparcial

Si bien la Constitución estipula que el poder judicial es independiente, en la práctica el poder judicial fue a veces vulnerable a presiones externas y corrupción. Los medios de comunicación informaron extensamente sobre la vulnerabilidad del poder judicial en cuanto a sobornos a cambio de decisiones y resoluciones de causas legales en forma favorable y sobre jueces que distribuyeron casos a abogados externos quienes, por su parte, redactaron sentencias judiciales sobre casos presentados al Tribunal y las devolvieron al juez presidente para su firma. Ocasionalmente los jueces adoptaron decisiones por influencia de los medios de comunicación o por presiones políticas y económicas.

El poder judicial está formado por la Corte Nacional de Justicia, los tribunales superiores de circuito y los juzgados de primera instancia. En reemplazo del Tribunal Constitucional, la nueva Constitución creó la Corte Constitucional que puede ver asuntos relativos a la Constitución. Los ciudadanos pueden presentar causas directamente ante la Corte Constitucional. La nueva constitución otorga al Consejo de la Judicatura poderes más amplios para supervisar no solamente al poder judicial, sino también a los fiscales y a los abogados particulares. La Fiscalía General del Estado forma parte del poder judicial.

La Constitución prevé un sistema judicial unificado, que abolió los sistemas judiciales militares y policiales separados, aunque la Asamblea Nacional aplazó la fecha de unificación judicial. En octubre la Corte Nacional de Justicia ordenó que los tribunales ordinarios comenzaran a procesar los casos pendientes y los nuevos casos policiales y militares. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura, encargado de administrar el sistema judicial, aplazó por 90 días la implementación de esa orden, para que hubiera tiempo de capacitar a los jueces especializados y establecer el presupuesto.

En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resolvió que era admisible la apelación hecha en 2005 por 27 magistrados

de la Corte Suprema, que el Congreso había sustituido en 2004. El caso seguía pendiente al finalizar el año.

Procedimientos judiciales

A pesar del empeño puesto en modernizar el régimen judicial, el poder judicial siguió funcionando con lentitud e incongruencia. Hubo prolongadas demoras antes de que la mayoría de los casos llegara a juicio. Según los informes, los jueces emitían fallos más rápida o lentamente como resultado de presiones políticas y, en algunos casos, del pago de sobornos. Las deficiencias del sistema judicial contribuyeron a crear situaciones en que algunas comunidades aplicaron la ley por cuenta propia, como en el caso de violencia colectiva contra presuntos delincuentes.

El sistema de justicia carece de jurados. Se presupone que los acusados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y tienen derecho a un juicio público, a abogados defensores y a apelar. Pueden presentar pruebas, negarse a prestar testimonio autoinculpatorio, y confrontar y contrainterrogar a los testigos. La ley confiere estos derechos a todos los ciudadanos. Aunque existe un sistema de defensoría de pobres, en la práctica la defensa del gran número de acusados pobres en el país está en manos de sólo 330 abogados, 150 de los cuales fueron contratados durante este año.

Grupos de la sociedad civil, colegios de abogados, universidades y donantes extranjeros hicieron lo posible para apoyar a grupos vulnerables carentes de acceso a los servicios de defensa jurídica.

El sistema judicial ordinario juzga a la mayoría de los acusados civiles, aunque algunos grupos indígenas juzgan a sus miembros independientemente por transgresiones de las reglas tribales. La nueva constitución ordena la eliminación de los tribunales militares y les ordena transferir sus casos a la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, este órgano, establecido en diciembre de 2008, no había enjuiciado a los miembros de las fuerzas militares ni de la policía al finalizar el año.

Aunque la ley y las constituciones anterior y actual reconocen el derecho de las comunidades indígenas a aplicar sus propios sistemas de justicia basados en sus tradiciones y costumbres, no

especifican cómo habría de ejercerse este derecho. Este sistema paralelo dio lugar a dudas no sólo sobre la jurisdicción sino también la conformidad con el derecho a un juicio justo.

Las reformas del Código de Procesamiento Civil que entraron en vigor el 24 de marzo distorsionaron el sistema judicial en lo penal, al limitar por ejemplo el plazo de detención previo a la sentencia pero permitiendo que los fiscales presentaran nuevas acusaciones, lo que mantiene detenidos a los sospechosos. Además, la nueva constitución coloca al fiscal general dentro del poder judicial y bajo su supervisión, otorgando poder exclusivo al Consejo de la Judicatura para capacitar, evaluar y disciplinar a los fiscales. Esto también amenazó la independencia de la fiscalía, ya que los fiscales están obligados a presentar sus decisiones discrecionales con respecto al enjuiciamiento de un caso para revisión por un magistrado en una audiencia conflictiva, probatoria, realizada durante la fase de investigación del juicio. Las reformas encaminadas a otorgar protección en el proceso penal dieron lugar a un sistema más complejo, resultando en un proceso judicial más lento. La ley incrementó el número de pasos formales en el ciclo de investigación, con no menos de 20 audiencias necesarias previas a la preparación para la audiencia del juicio (similar a una audiencia preliminar), que también incluye dictaminar en las mociones relacionadas con las cuestiones probatorias.

Detenidos y presos políticos

No hubo ningún informe de presos ni de detenidos políticos.

Procedimientos y recursos judiciales civiles

Los juzgados civiles y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo general considerados independientes e imparciales, tramitan las demandas de indemnización por daños y perjuicios causados por violaciones de los derechos humanos y demandas de cese de dichas violaciones. Sin embargo, casi no se presentaron demandas civiles de indemnización por daños y perjuicios por causa de presuntas injusticias del Estado puesto que esas demandas tomaban mucho tiempo y eran difíciles de

procesar, dado que a los jueces les tomaba hasta 10 años dictar sentencia sobre los méritos de cada caso.

- f. Injerencia arbitraria en la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia

La Constitución y la ley prohíben esos actos y, por lo general, el Estado respeta esas prohibiciones en la práctica.

Sección 2. Respeto de las libertades civiles, incluidas las siguientes:

Libertad de expresión y de prensa

Tanto la constitución anterior como la nueva estipulan la libertad de expresión y de prensa, y el gobierno ha respetado parcialmente esos derechos en la práctica. Este año hubo un aumento significativo de ataques legales y verbales contra la prensa de parte del Presidente Correa y su gobierno, con el consiguiente deterioro de las relaciones entre la prensa y el gobierno y un aumento en el número de denuncias de censuras indirectas y autocensura. No obstante, los medios independientes continuaron activos y expresaron una amplia variedad de puntos de vista, incluidas críticas contra el gobierno.

El 28 de octubre, las autoridades pusieron bajo arresto preventivo a Giancarlo Zunino y Félix Pilco, dirigentes de la Nueva Junta Cívica de Guayaquil, en espera de una investigación por cargos de "separatismo". El fiscal pidió su arresto por colgar pancartas en la ciudad de Guayaquil que declaraban "persona no grata" al Presidente Rafael Correa. Un juez los liberó el 6 de noviembre, bajo una fianza de \$500. Los abogados de los acusados dijeron que entablarían un juicio contra el fiscal y el juez de la Corte Constitucional.

El Presidente Correa usó regularmente su mensaje radiofónico y televisivo semanal y otras presentaciones públicas para criticar a los medios de comunicación y acusarlos de parcialidad, nombrando con frecuencia a reporteros y medios específicos. Varios periodistas e individuos que forman parte de las asociaciones de prensa locales denunciaron que los "sistemáticos" ataques verbales de Correa contra los medios creaban "un ambiente hostil para los periodistas". También

notaron un comportamiento similar de parte de otros funcionarios públicos de alto nivel.

El 17 de enero, Correa criticó al canal Teleamazonas por no pagar los impuestos en forma sistemática. El 2 de mayo, declaró que la prensa era "un serio enemigo político [que] debe ser derrotado". Enumeró lo que consideró las "peores" emisiones de los medios de comunicación en cuanto a corrupción. El 18 de julio, Correa atacó al periódico El Comercio por no corroborar sus fuentes cuando informó sobre una declaración del ex gobernador de Azuay que éste había advertido al Presidente Correa acerca de los contratos de su hermano con el gobierno. En su discurso inaugural del 10 de Agosto, Correa declaró que el "mayor adversario" en su mandato anterior había sido la prensa, afirmando que adoptó un papel político a pesar de no tener "ninguna legitimidad democrática" porque no había sido votada.

El 18 de julio, Fernando Alvarado, Secretario Nacional de Comunicación del Presidente Correa, señaló que no se comunicaría directamente con la prensa independiente y sólo haría anuncios oficiales a través de los medios de comunicación estatales. El 4 de agosto, Alvarado presentó una queja oficial ante la Asociación Interamericana de Prensa (SIP) contra el editor general de Expreso, Juan Carlos Calderón, y el columnista Jorge Vivanco por exhibir un comportamiento que denominó "discriminatorio" contra los periodistas del periódico estatal en línea El Ciudadano. Según Alvarado, tanto Calderón como Vivanco se negaron a ser entrevistados por el periódico oficial con respecto a sus artículos en los que se criticaba al gobierno.

En marzo la Asamblea General de la SIP afirmó que el gobierno siguió "sistemáticamente amenazando e insultando a la prensa y a los periodistas" y limitando su acceso a la información. Entre enero y agosto, se denunciaron más de 30 casos de acoso (amenazas, ataques o arrestos) contra periodistas u otros representantes de la prensa y cuatro asaltos o robos a los medios de difusión.

El 11 de febrero en Quito, el fiscal Luis Ramiro Sánchez amenazó a Ángelo Chamba, fotógrafo del periódico Hoy, y un agente de policía atacó a Chamba mientras estaba cubriendo el arresto de

otro periodista acusado de un delito. Dos agentes de policía metieron a Chamba en un vehículo, lo amenazaron y le quitaron su cámara, su radio y su teléfono celular. Lo privaron de libertad por 30 minutos y luego lo liberaron. Al día siguiente apareció en el juzgado para continuar con la cobertura de la misma noticia y la policía nuevamente confiscó su cámara y examinó las fotos.

El 13 de marzo, Emilio Palacios, autor de las notas editoriales del periódico El Universo, recibió amenazas de muerte por correo electrónico, en referencia a su noticia del 1 de marzo en la que criticaba a Correa por sus ataques semanales contra los medios de difusión. A petición de Palacios, el 19 de marzo el gobierno aceptó otorgar protección al periodista y a su familia.

El 3 de julio, hombres armados irrumpieron en las oficinas de la revista Vanguardia, amenazaron a los empleados y tomaron sus computadoras y archivos. El 7 de julio, dos hombres armados agredieron a José Luis Estrada, gerente general de la revista, fuera de su oficina, y le robaron su portafolio y computadora personal; no se comprobó que los dos incidentes estuvieran conectados.

Hubo varios incidentes de turbas o individuos en las turbas que agredían e insultaban a gritos a los periodistas que cubrían una protesta o evento. También se registraron algunos casos de gran relieve de censura oficial indirecta de los medios.

El 6 de marzo, José Toledo, vicepresidente de la división de noticias de tres canales de televisión que el gobierno había confiscado en julio de 2008, renunció antes de haber transcurrido un año desde que fuese nombrado a ese puesto, después de la toma estatal de las estaciones. Al renunciar citó la presión política que ejercían sobre él para que favoreciera a los candidatos oficiales en la cobertura de las elecciones de abril. Al finalizar el año, el gobierno continuaba controlando los tres canales: Gamavisión, TC Televisión y una estación de cable, Cable Noticias CN3.

Hubo también casos en que el gobierno hizo uso de mecanismos legales para restringir los medios y suprimir las críticas, incluido el uso de las leyes de difamación.

El 18 de mayo, un comité auditor creado por la nueva constitución encontró más de 700 irregularidades en su revisión de 1.637 concesiones de frecuencias de radio y televisión, entre ellas concesiones vencidas, "frecuencias clandestinas" y comportamiento monopolizador. Debido a las incongruencias del informe, sin embargo, en agosto el gobierno creó un nuevo comité para analizar dicho informe y hacer recomendaciones para iniciar un proceso. A fines de año, el informe no había sido publicado.

El 3 de junio, la entidad gubernamental que regula la radio y la televisión, Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONARTEL), emitió su primera sanción contra una estación de televisión independiente, Teleamazonas, por mostrar imágenes violentas de una corrida de toros durante el horario "familiar", que resultó en una multa de \$20 contra la estación. El 25 de junio, CONARTEL sancionó a la estación por segunda vez con una multa de \$40 por informar sobre un "centro clandestino de conteo de votos", que según CONARTEL la noticia estaba basada en "rumores" y no en pruebas concretas. El gobierno disolvió a CONARTEL en julio durante una reorganización del sector de telecomunicaciones que se anunció en octubre de 2008.

El 29 de agosto, el Presidente Correa exigió el cierre de Teleamazonas debido a la alegada transmisión ilegal por la estación el 25 de agosto, de una cinta de audio clandestina que supuestamente mostraba al Presidente y otros funcionarios del gobierno hablando sobre cómo alteraron el lenguaje en la nueva constitución después de que fuera aprobada por la Asamblea Nacional. El Presidente Correa acusó a la estación de infringir la Ley de Radiodifusión y Televisión al reproducir grabaciones adquiridas en forma encubierta, "espiando al Presidente" y "amenazando la seguridad nacional". El 2 de septiembre, un portavoz del gobierno retiró la afirmación de Correa y afirmó que el gobierno seguiría el debido proceso. Una tercera investigación oficial sobre Teleamazonas fue en relación a información supuestamente incorrecta transmitida por la estación, sobre la exploración de gas en la isla de Puná, que llevó en último término a la suspensión de la programación por 72 horas, anunciada por el superintendente de telecomunicaciones (SUPERTEL) el 22 de diciembre.

También el 22 de diciembre, SUPERTEL anunció que la emisora radial La Voz de Arutam, que transmite en la provincia de Morona Santiago a la comunidad indígena Shuar, perdería sus derechos de frecuencia por incitar a la violencia durante las protestas indígenas a fines de septiembre, que terminaron en la muerte de un manifestante Shuar. La estación apeló la decisión, permitiéndosele continuar con la programación, y el caso seguía pendiente al finalizar el año (véase la sección 2.b).

La nueva constitución define el espectro de frecuencias como recurso no renovable, propiedad del estado y dispone que la empresa explotadora de ese recurso no debe recibir mayor beneficio del que recibe el estado. Prohíbe a oligopolios y monopolios la titularidad de los medios de comunicación, así como el uso de las frecuencias. También proscribire la participación, en forma de capital, inversión y patrimonio, de grupos financieros, sus representantes legales, accionistas y directores en el control de los "medios sociales de comunicación". También dispone que el sistema de comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos de comunicación, información y libertad de expresión.

El gobierno de Rafael Correa aplicó una disposición de la Ley de Radiodifusión y Televisión que obliga a todas las estaciones a transmitir gratuitamente programas gubernamentales sobre temas de salud y educación hasta un máximo de una hora diaria (de lunes a sábado). También hace obligatoria la transmisión gratuita de mensajes e informes del Presidente y de su gabinete. La nueva constitución preservó la disposición constitucional anterior sobre el derecho de toda persona a recibir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, pluralista y sin censura previa. También incluye una disposición que estipula que la ley regulará el contenido informativo, educacional y cultural de la programación de los medios de comunicación.

Libertad en Internet

No hubo restricciones del gobierno al acceso a Internet, ni informes de que el gobierno hubiese controlado el correo electrónico ni las salas de conversación ("chat rooms") en Internet. Las personas y los grupos pudieron participar en la expresión pacífica de opiniones por medio de Internet, incluso

por correo electrónico. El acceso a Internet en las ciudades más grandes era amplio, pero en los sitios más alejados fue deficiente. En noviembre la Unión Internacional de Telecomunicaciones informó que había 2.034.000 usuarios de Internet, aproximadamente el 14 por ciento de la población.

Libertad académica y eventos culturales

No hubo restricciones gubernamentales sobre la libertad académica ni los eventos culturales.

b. Libertad de reunión y de asociación pacíficas

La constitución dispone la libertad de reunión pacífica, y el gobierno generalmente respetó este derecho en la práctica. Las fuerzas de seguridad utilizaron la fuerza y gases lacrimógenos para calmar algunas manifestaciones violentas, causando lesiones a algunas personas. Las manifestaciones públicas requieren de permisos gubernamentales previos, que en general fueron otorgados, aunque hubo excepciones.

En enero varias personas resultaron heridas cuando bloquearon los caminos en las provincias sureñas de Azuay, Zamora Chinchipe, Loja y Morona Santiago para protestar contra la ley de minería propuesta por el gobierno. El 5 de enero, los residentes de Pueblo Nuevo, provincia de Azuay, golpearon a dos agentes de policía y por 36 horas privaron de libertad a uno de ellos. El 7 de enero, altercados entre la policía y los residentes de Pueblo Nuevo terminaron con varios heridos, incluidos los escolares quienes se vieron afectados por el gas lacrimógeno.

El 29 de septiembre, Bosco Wisum murió en la provincia de Morona Santiago durante una protesta de los indígenas Shuar contra la Ley de Aguas propuesta y la existente Ley de Minería. Los informes preliminares señalaron que otros manifestantes probablemente mataron a Wisum accidentalmente cuando la policía llegó para quitar las barricadas del camino. Al finalizar el año, el gobierno y la Asamblea Nacional estaban investigando el incidente.

El 9 de abril, un juez desestimó el caso contra seis estudiantes encausados por haber ofendido al Presidente Correa durante los

altercados de agosto de 2008 entre la policía y los estudiantes universitarios, ocurridos durante y después de la transmisión radiotelevisiva del discurso del Presidente Correa en la Universidad Católica de Guayaquil.

Libertad de asociación

La ley establece la libertad de reunión y de asociación, y el gobierno generalmente respetó este derecho en la práctica.

c. Libertad de culto

La constitución dispone la libertad de culto, y el gobierno generalmente respetó este derecho en la práctica.

El gobierno exige el registro de los grupos religiosos.

Discriminación y abusos sociales

Los líderes musulmanes informaron que miembros de su comunidad fueron ocasionalmente blanco de discriminaciones arbitrarias en los mercados de trabajo y de vivienda. Hubo una denuncia aislada de un acto antisemita con graffiti sobre una pared en Quito. No hubo ningún otro informe de abusos sociales o discriminación por afiliación, creencia o práctica religiosa.

Para un trato más detallado del tema, ver el informe anual 2009 *International Religious Freedom Report* en www.state.gov/g/drl/rls/irf/.

d. Libertad de circulación, personas internamente desplazadas, protección de refugiados, y apátridas

La ley establece la libertad de circulación dentro del país, así como para los viajes al extranjero y la emigración y repatriación, y el gobierno generalmente respetó esos derechos en la práctica.

El gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y con otras organizaciones humanitarias, tales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para dar asistencia a refugiados y personas que buscaban asilo.

La ley prohíbe el exilio forzado, y el Estado no lo impuso.

Protección de refugiados

La nueva constitución reconoce los derechos de asilo y refugio, incluida la "protección especial con miras a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos". Las leyes establecen la concesión de asilo o de refugio de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en 1951, y su Protocolo de 1967, y el Estado ha establecido un sistema para conferir protección a los refugiados. El gobierno otorgó la condición de refugiado o asilo. En la práctica, el gobierno brindó protección contra la expulsión y la repatriación de refugiados a países donde correrían peligro sus vidas o sus libertades por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política. El gobierno también otorgó protección temporal a individuos que quizás no pudieran clasificarse como refugiados conforme al Convenio de 1951 o el protocolo de 1967. Esta protección incluye también la prestación de servicios al flujo continuo de colombianos que cruzaron la frontera norte durante todo el año.

El gobierno informó que recibió 12.363 solicitudes durante el año para obtener el estado de refugiado y reconoció a 5.067 refugiados. El 23 de marzo, el gobierno puso plenamente en práctica un programa de "registro perfeccionado" que facilitó el proceso de registro de los colombianos que buscan asilo de modo que aquellos que necesiten protección internacional puedan ser registrados, evaluados y provistos de documentación el mismo día. Anteriormente, el proceso de registro de refugiados podía llevar de uno a dos años en total y más de 30.000 casos permanecían pendientes en el proceso regular al comienzo del año. Desde marzo hasta diciembre, el gobierno reconoció a más de 21.000 refugiados conforme al programa mejorado de registro. Se anticipaba que este programa captaría hasta 50.000 refugiados colombianos para registrarlos y proveerlos de documentación en un período de 12 meses en la región fronteriza del norte. Los solicitantes rechazados, ya sea en el proceso de registro regular o en el perfeccionado, tienen el derecho legal de apelar esa decisión; después de haber agotado el recurso de apelación, tienen 30 días para salir del país. No hubo ningún informe de nadie sin el estado de refugiado que hubiese sido expulsado. Si bien el ACNUR y el gobierno declararon que habían tenido

dificultades para tramitar el número de solicitantes y de apelaciones, tanto el ACNUR como la OIM apoyaron los esfuerzos desplegados por la oficina nacional de refugiados para simplificar sus procesos de adopción de decisiones y de apelaciones y reducir el número de casos acumulados.

En el país había cerca de 45.820 refugiados reconocidos. En 2008, el gobierno y el ACNUR calcularon que aproximadamente 135.000 personas necesitaban protección internacional, de las cuales aproximadamente 68.000 no estaban registradas con el gobierno como solicitantes de asilo en ese momento.

El 90 por ciento de los que solicitaron asilo eran colombianos, y los demás provenían de una gran variedad de países, entre ellos Cuba, Perú, Haití, Nigeria, Pakistán y Bangladesh. La ley les concede el derecho de trabajar a los refugiados, pero no a los que solicitan asilo. La ley garantiza a los refugiados y a los que solicitan asilo el mismo acceso que tienen los ecuatorianos a los servicios de salud pública. La presentación de cualquier documento de identidad es suficiente para asegurar el acceso a las instituciones de educación pública.

Sección 3. Respeto de los derechos políticos: El derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno

La ley estipula que los ciudadanos tienen el derecho a cambiar su gobierno de manera pacífica, y los ciudadanos ejercieron ese derecho en la práctica por medio de elecciones periódicas, libres y justas que se llevaron a cabo sobre la base del sufragio universal.

Elecciones y participación política

De conformidad con la nueva constitución, las elecciones para cargos públicos en todos los niveles del gobierno se celebraron el 26 de abril y el 14 de junio. El 26 de abril, los votantes reeligieron a Rafael Correa para ejercer un nuevo mandato presidencial de cuatro años. Además los votantes eligieron a un vicepresidente, prefectos y viceprefectos provinciales, alcaldes, miembros de la Asamblea Nacional y concejales municipales; 1.969 cargos en total. El 14 de junio se llevó a cabo la elección de cinco miembros al Parlamento Andino y 3.985 miembros de las juntas de parroquias rurales. La Organización de

los Estados Americanos y los observadores de la Unión Europea concluyeron que las elecciones fueron por lo general libres y justas, con irregularidades locales, y destacaron las áreas que necesitaban mejorar en elecciones posteriores.

Aunque los equipos de observadores internacionales y nacionales no informaron sobre ningún fraude importante, hubo algunos informes de votos faltantes o marcados, irregularidades de conteo y de cálculo de votos e incidentes de violencia.

En 2008, junto con la nueva constitución, el electorado aprobó un "régimen de transición", que regula la transición al nuevo orden institucional. La Corte Constitucional provisional y la Corte Nacional de Justicia continuaron en funciones. El interino Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, institución que depende de la recientemente creada Función de Transparencia y Control Social, fue investido el 26 de enero y disuelto el 9 de septiembre cuando entró en vigencia la ley que reglamentaba la selección del consejo permanente. Sobre la base de esa ley, el Consejo Nacional Electoral empezó a supervisar la selección según el mérito de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social permanente. La entidad estatal Función de Transparencia y Control Social fue establecida para promover la participación ciudadana y evitar la corrupción.

La constitución dispone que el estado promueva una representación equilibrada de los sexos en el sector público, incluidos los cargos en que se toman decisiones, y exige que el gobierno adopte políticas de acción afirmativa para promover la participación de los grupos afectados. La nueva constitución concede el sufragio a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía, y reduce la edad mínima para votar de 18 a 16 años.

La nueva constitución contempla la representación equilibrada de los sexos en las listas de candidatos de los partidos políticos a cargos en la Asamblea Nacional y en otras instituciones representativas. Los votantes eligieron a 40 mujeres a la Asamblea Nacional, que tiene 124 escaños; la investidura tuvo lugar el 31 de julio. Al mes de diciembre, había nueve mujeres en el gabinete de 27 miembros y dos Secretarías de Estado con el rango de ministra.

En el gabinete había un ecuatoriano de origen asiático, pero ninguno de origen africano ni indígena.

Sección 4. Corrupción oficial y transparencia en el gobierno

La ley estipula la imposición de sanciones penales por corrupción oficial; sin embargo, el gobierno no aplicó la ley eficazmente, y a veces los funcionarios incurrieron en prácticas corruptas con impunidad. Los indicadores mundiales de gobernanza del Banco Mundial señalaron que la corrupción en el gobierno era un problema grave.

En junio, los medios locales de difusión informaron que el empresario Fabricio Correa, hermano del Presidente Rafael Correa, había firmado contratos del sector público por un valor superior a \$80 millones durante el gobierno de Correa, lo cual dio lugar a mayores inquietudes públicas sobre la corrupción. El 5 de septiembre, en respuesta a las imputaciones, el Presidente Correa anunció que anularía todos los contratos del gobierno que estaban relacionados con su hermano. El 9 de septiembre, el Contralor General del Estado, Carlos Polit, anunció que según la revisión hecha por su oficina de los contratos públicos en cuestión había "irregularidades" de contratación, incluidos 31 casos de trabajos o pedidos no cumplidos por las empresas de Fabricio Correa. Según el informe del contralor, el monto total recibido por las empresas de Correa por los contratos oficiales fue de \$167 millones. En respuesta a la anulación de sus contratos, Fabricio Correa hizo sus propias acusaciones de corrupción en el gobierno de su hermano y, como apoyo, presentó en la Procuraduría General pruebas presuntas contra varios miembros del gabinete del Presidente Correa. Tanto la Procuraduría General como la Asamblea Nacional iniciaron investigaciones sobre las acusaciones de Fabricio Correa; las investigaciones proseguían al finalizar el año.

En agosto, una empresa petrolera multinacional proporcionó a las autoridades gubernamentales videos grabados en forma clandestina que supuestamente desenmascaraba un complot de soborno relacionado con una demanda ambiental multimillonaria contra ella en un juzgado ecuatoriano. El juez que había estado presidiendo el caso y algunos miembros del movimiento Patria Activa y Soberana del Presidente Correa aparecieron en las

grabaciones. La Fiscalía General inició una investigación sobre las imputaciones, mientras que los demandantes en el pleito reclamaron que los videos fueron fraguados.

Las investigaciones de la fiscalía continuaron con la investigación de julio de 2008 del ex Defensor del Pueblo Claudio Mueckay, por una presunta malversación de los fondos públicos, y el caso de agosto de 2008 sobre irregularidades relacionadas con contratos y personal que asesoraba a la Asamblea Constituyente.

El 7 de enero, las autoridades encarcelaron al ex Ministro del Deporte Raúl Carrión, que dimitió en diciembre de 2008 después de la detención preventiva de tres de sus asesores durante la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, entre otros cargos. El 27 de abril, la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia liberó a Carrión, pero la fiscalía revocó su liberación el 5 de mayo en medio de críticas generalizadas, hasta del Fiscal General. Carrión recuperó su libertad el 22 de diciembre debido a la caducidad del plazo de detención preventiva. Al mismo tiempo, por falta de pruebas el fiscal lo absolvió de los cargos que pesaban en su contra por lavado de activos. Sin embargo, los cargos por fraude continúan pendientes y el procedimiento judicial contra Carrión seguía en curso al finalizar el año.

En diciembre de 2008, el Presidente Correa creó por decreto presidencial la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, encargada de investigar y denunciar casos de corrupción y promover prácticas transparentes en la administración pública.

La nueva constitución declara que todas las personas tienen el derecho de acceder a la información recabada por las organizaciones públicas o privadas que reciben fondos estatales. Exige además que la información esté disponible en el idioma del ciudadano. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2004 define estos derechos y exige que las dependencias gubernamentales proporcionen al público, en forma gratuita, toda la información recabada por las organizaciones que reciben fondos públicos, incluidos los sindicatos y las ONG, excepto la información personal de cada ciudadano y la información relativa a la seguridad nacional.

Como resultado, las dependencias gubernamentales cada vez ponen en Internet más información sobre el presupuesto, las funciones, la información organizativa, las listas de funcionarios públicos y todos los avisos oficiales, además de responder a las peticiones por escrito.

En un estudio de un año sobre la aplicación de esta ley, una ONG encontró que mientras muchos organismos se demoraban en publicar en Internet la información exigida por ley, se respondió el 97 por ciento de los pedidos de información recibidos por escrito, y solamente una petición no tuvo respuesta. Los organismos respondieron al 63 por ciento de los pedidos dentro del plazo establecido por la ley. En unos pocos casos, la ONG observó que la información específica pedida no fue recibida, porque no existía o no era accesible a la búsqueda oficial. El informe señaló que muchas dependencias gubernamentales no tenían ni los presupuestos requeridos para implementar plenamente la ley ni la tecnología para encontrar fácilmente la información. Para otras ONG, el nivel de cumplimiento del gobierno con la publicación de la información necesaria en sus páginas de Internet fue de alrededor del 70 por ciento, aunque estos datos pueden ser incompletos o inexactos.

Sección 5. Postura del gobierno ante la investigación por organizaciones internacionales y no gubernamentales de presuntas violaciones de los derechos humanos

Varios grupos nacionales e internacionales de derechos humanos actuaron en general sin restricciones gubernamentales, investigando y publicando resultados en casos de derechos humanos. Los funcionarios públicos cooperaron con los grupos, pero a menudo se abstuvieron de obrar conforme a sus recomendaciones.

La Defensoría del Pueblo se concentró en problemas relacionados con los derechos humanos. La nueva constitución describe la Defensoría del Pueblo como parte independiente del poder judicial, que fue establecida para garantizar la igualdad de acceso a la justicia y la protección de los derechos. La dependencia cuenta con 50 miembros y presenta casos a la fiscalía con regularidad, pero con poco éxito. En julio de 2008, la Asamblea Constituyente nombró a un Defensor interino. Al igual que muchas de las instituciones reestructuradas o nuevas

establecidas por la nueva constitución, esta organización no estaba completamente definida. Cuando se establezca el Consejo permanente de Participación Ciudadana y Control Social a mediados de 2010, se espera crear un sistema por méritos para recibir nombramientos y seleccionar al Defensor del Pueblo.

La Comisión de la Verdad, establecida en 2007 para investigar presuntas violaciones de los derechos humanos (sobre todo durante el período de 1984-1988), investigó 150 casos de violaciones de los derechos humanos pero al finalizar el año aún no había difundido su informe (Véase la sección 1.a).

Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas

La nueva constitución prohíbe la discriminación por razones de raza, sexo, discapacidad, idioma o condición social; sin embargo, las mujeres, las personas con discapacidades, los indígenas, los afroecuatorianos, los gays, las lesbianas, los bisexuales y los transexuales siguieron siendo discriminados.

Mujeres

Aunque la ley prohíbe la violencia contra la mujer, incluso dentro del matrimonio, hubo abusos generalizados.

La ley penaliza la violación y establece penas máximas de 25 años de encarcelamiento. La ley no penaliza la violación conyugal, aunque de acuerdo con el derecho de familia la violación conyugal se considera un tipo de violencia. La pena por violación que cause la muerte es de 16 a 25 años de encarcelamiento. Al mes de octubre, se habían denunciado 3.547 casos de violación, de los cuales 914 se presentaron oficialmente y 294 fueron enjuiciados con éxito. Muchas violaciones no fueron denunciadas por renuencia de la víctima a confrontar al agresor.

Las violaciones más generalizadas de los derechos de la mujer tienen que ver con la violencia doméstica y la sexual. A pesar de estar prohibidas por la ley, ambas estaban generalizadas y la gran mayoría de casos no se denunciaban. La Dirección Nacional de Género del Ministerio de Gobierno y Policía, basándose en informes preliminares y parciales recibidos por el mismo al 31 de octubre, informó que se habían denunciado 48.022 casos de maltrato sexual, psicológico o físico de mujeres y, al mes de junio, 7.040 casos en que las víctimas eran hombres. Un factor adicional fue la renuencia policial y judicial a intervenir en

casos de violencia doméstica. Muchas mujeres que denunciaron haber sido víctimas de abuso doméstico o delitos sexuales fueron referidas al sistema judicial por las autoridades, pero las brechas en este proceso contribuyeron a que se desestimaran las acusaciones contra los agresores.

Si bien la nueva constitución eliminó las 34 Comisariías de la Mujer y la Familia, que manejaban asuntos como la violencia doméstica, el gobierno estableció nuevos centros conjuntos de servicios públicos para ayudar a los ciudadanos. Estos centros proporcionaron asistencia gratuita a las víctimas de violencia doméstica y de género sobre cuestiones legales, asistencia social y médica y protección policial. La ley prevé sanciones para la violencia doméstica de hasta \$28 de multa o siete días de encarcelamiento y confiere a los tribunales de familia la facultad de expulsar del hogar a un cónyuge maltratante si la cohabitación permanente acarrea un riesgo para la víctima de maltrato.

La nueva constitución prevé la creación de tribunales especializados en cuestiones relativas a las mujeres y la familia, que dependen del poder judicial y tienen facultades para expedir órdenes de restricción que prohíben que el cónyuge maltratante se acerque a la víctima o a su lugar de trabajo o de estudio; prohíben que el cónyuge maltratante persiga o intimide a la víctima o a cualquiera de sus familiares; reincorporan a la víctima al hogar familiar, si comparte un hogar común, y expulsan simultáneamente al cónyuge maltratante del sitio en cuestión; y prescriben cualquier tratamiento que se considere beneficioso para la familia afectada. En noviembre, la Corte Constitucional estableció una Oficina Regional de Observadores para las Decisiones Judiciales con el fin de estudiar las sentencias judiciales de seis países latinoamericanos e informar si, con respecto a los derechos de la mujer, esos países cumplen con las normas internacionales, incluidas las declaraciones de las Naciones Unidas.

La nueva constitución brinda a las mujeres una gama de beneficios económicos, políticos y sociales. Organismos feministas aplaudieron estas disposiciones, pero también señalaron que se debía cumplir con muchos requisitos legales y financieros para aplicar las reformas. Entretanto, un consejo de

transición manejó los proyectos en todas las provincias, concentrados principalmente en igualdad de oportunidades, programas de política pública referente a las mujeres y líneas de crédito para empresas dirigidas por mujeres. La ley estipula que el gobierno debe formular e implementar las políticas para lograr igualdad de género, con hincapié en una mayor participación de la mujer en los planes y programas y en brindar asistencia técnica para implementar la ley en el sector público.

La aprobación de la nueva constitución reestructuró el ex Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU)--cuya función principal era la promulgación y el cumplimiento de las políticas públicas para promover los asuntos y derechos de la mujer. El Consejo pasó a formar parte de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, entidad a nivel ministerial encargada de garantizar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones del gobierno, especialmente entre grupos que siempre han sido desfavorecidos.

La prostitución es legal para las personas mayores de 18 años, siempre que los burdeles estén registrados con el gobierno y sigan el reglamento sanitario. La trata de personas con fines de prostitución constituyó un problema.

A pesar de la prohibición legal del acoso sexual, varias organizaciones de defensa de los derechos de la mujer declararon que el acoso es común en el lugar de trabajo. El CONAMU y posteriormente el consejo de transición estaban a cargo de formular políticas públicas para promover los derechos humanos de las mujeres y su igualdad en casos de acoso sexual.

La nueva constitución reconoce los derechos sexuales y reproductivos. La Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia protege los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y exige atención prenatal gratuita, servicios de planificación familiar y pruebas de detección de cáncer. Según las estadísticas de la Oficina de Referencias Demográficas, el 69 por ciento de las mujeres contó con ayudantes capacitados durante el parto, y el 99 por ciento contó con prestadores de asistencia sanitaria durante el parto. Según un sondeo de 2004 sobre la información demográfica y la salud maternal, más del 70 por ciento de las mujeres usaron anticonceptivos, con un 5 por

ciento de "necesidad insatisfecha" de planificación familiar. La brecha entre el índice de uso de anticonceptivos en las poblaciones rurales y urbanas fue mínima, de 67 y 77 por ciento respectivamente. Más del 36 por ciento de los usuarios de métodos anticonceptivos modernos recibieron estos servicios por medio de los programas patrocinados por el gobierno. El gobierno empezó a implementar un programa nacional contra la infección por el VIH/SIDA para prevenir la transmisión maternoinfantil de la enfermedad y proporcionó pruebas de detección gratuitas a todas las mujeres. La ley también promueve una mayor participación de los hombres en la atención y el cuidado otorgando hasta 10 días de licencia por paternidad.

A pesar de la protección legal de los derechos de la mujer en la política, el hogar y el lugar de trabajo, se observó una discriminación social generalizada contra las mujeres, particularmente con respecto a oportunidades educativas y económicas para las de edad avanzada y las pertenecientes a las clases económicas más bajas. Aunque las mujeres gozaron de la misma condición legal que los hombres, en la práctica las mujeres frecuentemente no recibieron los mismos derechos. Según el gobierno, las mujeres recibieron aproximadamente el 65 por ciento de la remuneración que se pagó a los hombres por un trabajo equivalente. Los defensores de las mujeres alegaban que la cultura y la tradición impedían que ellas logaran la plena igualdad. La información fidedigna sobre la situación de la mujer dentro de las comunidades indígenas bien cerradas fue prácticamente inexistente.

El Foro Nacional Permanente de la Mujer Ecuatoriana abarcaba a más de 320 organizaciones dirigidas por mujeres y promovía el cambio social, económico y cultural, incluida una mayor participación política de la mujer durante el proceso de redacción de la constitución que la Asamblea Constituyente llevó a cabo en 2007-2008. Según el Foro, hubo una mayor participación de la mujer en el referendo constitucional de 2008 que en las elecciones anteriores.

Niños

La ciudadanía se obtiene mediante el nacimiento en el país o por nacimiento de una madre o un padre ecuatoriano en el extranjero

(hasta la tercera generación). Desde 2006 el gobierno promovió el registro civil y facilitó la inscripción para adultos y niños. El Ministerio de Salud puso en práctica un programa para inscribir a los recién nacidos en la fecha de nacimiento en hospitales y consultorios, y los centros móviles de registro se extendieron regularmente a las zonas rurales. Como resultado, el número de ciudadanos no inscritos disminuyó 40 por ciento, de 1,5 millones a menos de 900.000, de los cuales 100.000 eran indígenas y 300.000 eran menores de 18 años de edad.

Las autoridades no negaron el acceso a la educación por falta de documentación; por consiguiente, algunos padres supuestamente no comprendieron la importancia de inscribir a sus niños. Para otros servicios públicos, sin embargo, como por ejemplo los subsidios de asistencia social y la atención primaria de salud gratuita, se necesitaba algún tipo de identificación. La campaña de registro fue diseñada en parte para informar a los adultos sobre los beneficios de inscripción tanto de sus hijos como de ellos mismos, así como sus obligaciones ciudadanas.

La nueva constitución aumentó el requisito mínimo de educación obligatoria de 10 a 15 años; sin embargo, debido a la escasez de escuelas, el financiamiento deficitario de las mismas y el costo relativamente alto de libros y uniformes, el gobierno rara vez hizo cumplir el requisito mínimo nuevo o antiguo.

No se observó ningún patrón social de abuso de menores.

La explotación sexual comercial de menores seguía siendo un problema; con penas de seis a 16 años de cárcel. La ley prohíbe la pornografía infantil, con sanciones de seis a 16 años de cárcel. La ley se aplica al estupro; la edad mínima de consentimiento es 14. La pena por estupro es de 16 a 25 años de encarcelamiento.

Más de 20 ONG promovieron el bienestar infantil. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y varios organismos tenían programas activos para ayudar a los niños callejeros.

Trata de personas

El gobierno reconoció que la trata de personas era un problema nacional, prohibida por la ley. No obstante, se informó que

había trata de mujeres y niños en el territorio nacional, a través del mismo y desde el exterior y hacia el exterior. El país fue lugar de procedencia y de destino de la trata.

La Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes informó que la mayoría de las víctimas identificadas provenían de Pichincha, El Oro y Orellana.

Los tratantes eran pandillas de delincuentes organizados que se especializaban en el traslado de personas, dueños de pequeñas empresas como bares o prostíbulos o agentes de empleos ilícitos. Distintas versiones indicaban que las formas de reclutamiento de los tratantes variaban según el tipo de explotación. En el caso de la explotación sexual, las víctimas eran seducidas románticamente o con promesas de empleo legítimo para luego ser forzadas a ejercer la prostitución. Estos tratantes les ofrecían a los padres oportunidades de educación y empleo para sus hijos.

La ley penaliza la trata de personas y estipula períodos de encarcelamiento de seis a 35 años. La ley también estipula castigos de seis a 12 años de cárcel por promover el turismo sexual. Desde abril hasta diciembre, las autoridades abrieron 41 casos por trata de personas, trabajos forzados o explotación sexual, entre otros; la información sobre las condenas dictadas no estaba disponible al finalizar el año.

El gobierno tenía una unidad policial especializada contra la trata de personas, con 18 agentes investigadores y dos analistas de inteligencia. Durante el año esta unidad recibió 46 informes sobre la trata de personas, realizó 15 investigaciones u operaciones "encubiertas", detuvo a 17 sospechosos y rescató a 44 víctimas de la trata, según el Consejo Nacional de la Judicatura.

Numerosos municipios tuvieron planes de acción contra la trata, campañas de prevención y redes contra la trata que funcionaban conjuntamente con el gobierno nacional. La Unidad de Delitos Sexuales y Trata de Personas de la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Cuenca, denunció cuatro casos de trata de personas, relacionadas, respectivamente, con la pornografía infantil, la explotación laboral, la explotación sexual y la mendicidad forzada. Las investigaciones de todos estos casos seguían en curso al finalizar el año. Otros casos incluían el

secuestro y la venta de niños recién nacidos, y niños utilizados para transportar drogas y cometer hurtos menores.

El gobierno brindó albergue y asistencia a las víctimas de la trata. Por ejemplo, en la provincia de Pinchicha las autoridades brindaron asistencia directa a 71 víctimas de la trata durante el año, con oportunidades de reinserción social. En diciembre, un tribunal en la provincia sentenció a ocho años de cárcel a un tratante arrestado en 2006 por la explotación sexual de un adolescente.

El Ministerio de Gobierno y el de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia, y la Secretaría Nacional del Migrante coordinaron la repatriación, de Colombia y de Chile, de cinco ecuatorianas víctimas de la explotación laboral. El Ministerio de Turismo lanzó una campaña en 24 provincias para prevenir la explotación sexual de niños y adolescentes. En octubre una investigación condujo al arresto de una mujer que viajaba de Ecuador a Venezuela con seis niños y cuatro adolescentes. Ninguno de los niños tenía los documentos que les autorizaba a salir del país, y los fiscales sospecharon que la mujer formaba parte de una banda dedicada a la explotación de niños como trabajadores domésticos. Al finalizar el año, el caso continuaba en investigación.

En julio el gobierno estableció un sistema integrado de base de datos controlado por el estado para recabar importante información estadística sobre la trata de personas. La OIM instruyó a diferentes funcionarios estatales y les proporcionó asistencia técnica, principalmente en el Ministerio de Justicia, sobre el manejo y el uso de este medio.

El informe anual del Departamento de *Estado Trafficking in Persons Report* se encuentra en www.state.gov/g/tip.

Personas con discapacidades

La constitución prohíbe la discriminación contra personas, con discapacidades físicas y mentales, en el empleo, la educación, el acceso a la atención de salud y la prestación de otros servicios públicos. El Consejo Nacional de Discapacidades, organismo interinstitucional, supervisa las políticas gubernamentales referentes a las personas con discapacidades.

Aunque la ley decreta el acceso a edificios para las personas con discapacidades, el gobierno no hizo cumplir plenamente esta orden.

Para las elecciones del 26 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) imprimió papeletas en el sistema Braille sólo para la carrera presidencial. Según el CNE, debido al importante número de postulantes para los cargos y el complejo sistema de votación, para listas enteras de candidatos o candidatas entre las listas, el CNE no imprimió papeletas en el sistema Braille para los demás cargos en las elecciones del 26 de abril ni del 14 de junio. En cambio, el CNE permitió que las personas no videntes recibieran asistencia de un familiar durante la votación y proporcionó capacitación a los coordinadores del CNE, así como a los agentes de policía y militares, para lograr una mayor concientización sobre las necesidades específicas de votación de las personas con discapacidades. El CNE proporcionó intérpretes de lenguaje de señas e hizo todo lo posible para asegurar que los puestos de votación fueran totalmente accesibles para las personas con discapacidades.

La nueva constitución brinda beneficios a las personas con discapacidades, sobre todo en materia de educación, empleo y acceso al seguro social. La ley exige la contratación de personas con discapacidades en todas las empresas públicas y privadas que tengan más de 25 empleados. Según un discurso radial del Vicepresidente Lenín Moreno el 28 de noviembre, el 92 por ciento de las empresas públicas y privadas cumplieron con la ley. Moreno señaló que las empresas restantes serían sancionadas, pero no especificó de qué manera. La iniciativa "Ecuador sin barreras", encabezada por el Vicepresidente, ayudó a crear un número no precisado de empleos para las personas con discapacidades. En noviembre, el municipio de Guayaquil, la ciudad más grande del país, abrió el debate sobre una disposición que exigiría a todas las empresas e instituciones públicas mejorar el acceso para los discapacitados y los ancianos. La reglamentación final no se había publicado al finalizar el año.

Minorías nacionales, raciales y étnicas

Los ciudadanos afroecuatorianos, que constituyen cerca del 3 por ciento de la población, fueron víctimas de discriminación generalizada, en particular con respecto a oportunidades educativas y económicas.

El Centro Cultural Afroecuatoriano estimó que un 70 por ciento de los afroecuatorianos viven en la pobreza. Las organizaciones afroecuatorianas señalaron que, a pesar de la ausencia de discriminación oficial, la discriminación social, incluidos los estereotipos, siguió afectando a ese grupo. Por ejemplo, siguieron afirmando que la policía detenía a los afroecuatorianos para verificar sus documentos con más frecuencia que a otros ciudadanos y que los empleadores a menudo se abstendían de entrevistar a personas cuya solicitud de empleo llevaba fotografías de afroecuatorianos. El gobierno no puso especial empeño en abordar estos problemas, excepto en la Municipalidad de Quito, que en diciembre de 2008 prohibió que las instituciones públicas y privadas de Quito aceptar *curricula vitae* con fotos.

El Centro de Desarrollo por la Equidad Racial informó que había acrecentado la violencia por parte de las fuerzas públicas. Según este centro, el 10 de enero, miembros de las Fuerzas Armadas detuvieron y supuestamente torturaron a tres jóvenes afroecuatorianos en la zona de Carcelén, en Quito. El Defensor del Pueblo determinó que el ataque fue motivado por discriminación racial y recomendó que los agentes fueran destituidos. El tribunal militar que oyó el caso impuso una medida administrativa de dos días de detención. El fiscal civil a quien el caso fue remitido señaló que no procedía una investigación penal en los tribunales civiles porque el caso ya había sido juzgado en el tribunal militar y los demandados no podían ser encausados dos veces por el mismo delito. (Los tribunales militares fueron abolidos posteriormente ese año.)

La nueva constitución declara que el estado es plurinacional, afirma el principio de la no discriminación al reconocer el derecho de las comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias a la restitución por actos de discriminación y ordena políticas de acción afirmativa que aseguren la representación de las minorías. El 13 de octubre, el gobierno publicó un Decreto Ejecutivo con un plan pluricultural nacional para eliminar la

discriminación racial y la exclusión étnica y cultural. Entre otras disposiciones, exige a todos los organismos del sector público que garanticen que el "acceso al trabajo" refleja el porcentaje de las poblaciones indígenas, afroecuatorianas y montubias (población agrícola y rural reconocida como un grupo étnico independiente).

Pueblos indígenas

Los cálculos del número de personas que mantenían su identidad cultural indígena y vivían en comunidades indígenas oscilaban entre el 7 y el 30 por ciento de la población. La gran mayoría de los ciudadanos indígenas residía en zonas rurales, incluso en la sierra y las provincias de la Amazonía. El índice de alfabetización entre los indígenas era aproximadamente 72 por ciento. A pesar de su influencia política y los esfuerzos de grupos comunitarios de base para ayudarlos, los indígenas continuaban sufriendo los efectos de la discriminación en muchos niveles de la sociedad y, con contadas excepciones, se encontraban en el estrato socioeconómico más bajo.

La tierra cultivable fue escasa en las zonas montañosas más densamente pobladas, donde una tasa elevada de mortalidad infantil, la malnutrición y las enfermedades epidémicas eran comunes entre la población indígena. A menudo no había electricidad ni agua potable. Aunque el sistema de educación rural presentó graves deficiencias, muchos grupos indígenas participaron con el Ministerio de Educación en la creación del programa de educación bilingüe que se impartía en las escuelas públicas rurales.

La nueva constitución consolida los derechos de los pueblos indígenas; declara que el país es plurinacional, reconoce el quechua y el shuar como "idiomas oficiales de relación intercultural" y también reconoce específicamente la justicia indígena. La ley actual también reconoce los derechos de las comunidades indígenas a la propiedad comunitaria, a administrar la justicia comunitaria tradicional en ciertos casos y a que se les consulte antes de explotar recursos naturales en territorios comunales. En muchos casos, la comunidad indígena cuenta con el título de propiedad de las tierras, y algunos grupos indígenas tenían la esperanza de ampliar esas áreas. En otros casos, los

grupos indígenas administraron una reserva que el gobierno separó para proteger la diversidad biológica. Además, los pueblos indígenas tienen los mismos derechos civiles y políticos que los demás ciudadanos.

Tanto la constitución anterior como la actual otorgan a los pueblos indígenas el derecho de participar en las decisiones relativas a la explotación de recursos no renovables localizados en sus tierras y que podrían afectar su cultura o ambiente. La nueva constitución permite que los pueblos indígenas participen de los beneficios que puedan conllevar esos proyectos y que reciban compensación por cualquier daño que dichos proyectos ocasionen. En caso de daño ambiental, la nueva constitución exige acciones gubernamentales correctivas inmediatas y la restitución total por parte de la empresa responsable. Sin embargo, algunos organismos indígenas alegaban que no se les consultaba ni tampoco había remedio.

Grupos indígenas presionaron al gobierno, consiguieron la ayuda de ONG nacionales y extranjeras y organizaron protestas para tratar de obtener una mayor parte de los ingresos provenientes del petróleo y mayor participación en la toma de decisiones referentes al uso de recursos naturales y al desarrollo. Colonos, narcotraficantes y madereros invadieron ilegalmente los territorios indígenas. Las autoridades locales corruptas, la falta de voluntad política y las divisiones entre varias comunidades indígenas y dentro de ellas minaron los esfuerzos de esas comunidades para poner fin al tráfico de madera talada ilegalmente. Otro problema grave fue el daño ambiental generalizado, debido en parte a la deforestación y a la producción de petróleo.

La Defensoría del Pueblo tenía representantes en comunidades indígenas en todo el país. Los representantes estaban a cargo de promover los derechos humanos e indígenas dentro de las comunidades indígenas, además de brindar servicios de asesoría específica a las mismas.

Abusos sociales, discriminación y actos de violencia por la orientación sexual e identidad de género

La nueva constitución de 2008 incluye el principio de la no discriminación y establece el derecho de elegir la orientación

sexual. Los actos homosexuales no se tipifican como delitos. Las personas transexuales tienen el derecho de identificarse con el sexo de su elección en sus documentos nacionales de identificación, según un proceso judicial en la provincia de Pichincha. Aunque la ley prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual, los grupos de gays, lesbianas, transexuales y travestís siguieron sufriendo discriminación por parte de varios órganos públicos y privados. En septiembre, el Consejo Nacional Electoral publicó las reglas que regían la selección del procurador general nacional, el contralor, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y los directores de ciertos órganos normativos, concediendo a los candidatos que eran lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) a esos cargos dos puntos adicionales en sus solicitudes. La medida fue diseñada para ayudar a los grupos tradicionalmente desfavorecidos a participar con más eficacia en el gobierno.

Había organizaciones de LGBT y éstas no estaban enteradas de que hubiese incidentes de violencia cometidos por la policía u otros funcionarios oficiales contra el establecimiento de dichas organizaciones. Tales grupos organizaron múltiples desfiles de Orgullo Homosexual en el último decenio con permiso de las autoridades pertinentes y recibieron protección policial.

Si bien no hubo discriminación oficial, no faltó discriminación social. El ONG Kimirina informó que los miembros de la comunidad de LGBT creían que con frecuencia no se respetaba su derecho a la igualdad de acceso a la instrucción y al empleo formal. Los LGBT que participaron en la industria del sexo denunciaron situaciones de abuso, extorsiones y malos tratos por las fuerzas de seguridad pero no presentaron ni formularon acusaciones formales ante la Fiscalía General.

La investigación, en abril de 2008, del caso en que un agente de policía supuestamente empujó y dio un puñetazo a un miembro de una minoría sexual seguía en curso al finalizar el año.

Otros casos de violencia o discriminación sociales

La nueva constitución prohíbe específicamente la discriminación contra las personas con VIH/SIDA. No hubo violencia social contra esas personas; sin embargo, las ONG informaron que las

personas con VIH/SIDA creían ser discriminadas, incluso en cuestiones relativas a la igualdad de oportunidades de empleo y el acceso a la atención de salud apropiada.

Sección 7. Derechos de los trabajadores

a. El derecho de asociación

Si bien la ley concede a casi todos los trabajadores el derecho de formar sindicatos de su elección y de afiliarse a ellos, las medidas de protección jurídica de esos derechos fueron inadecuadas y a veces insuficientes para disuadir a los empleadores de tomar represalias contra los trabajadores por sindicarse. En mayo, un empleador despidió a 26 trabajadores en una fábrica de atún en la provincia de Manabí por sindicarse. En julio, los gerentes despidieron a 46 trabajadores en una plantación destinada a la producción de madera y a 15 trabajadores en un hospital después de sindicarse. Integrantes de la policía, las fuerzas militares y la mayoría de los empleados del sector público (aquellos afectados por la Ley del Servicio Civil) carecían de libertad para formar sindicatos. Aproximadamente entre el 1,2 y el 3 por ciento de la fuerza laboral estaba sindicado.

Si bien los empleados de las organizaciones estatales gozaban de derechos similares a los de los empleados del sector privado, la ley prohíbe a la mayoría de los empleados del sector público afiliarse a sindicatos o ejercer los derechos de negociación colectiva. De acuerdo con la ley, los empleados que no estén en las categorías técnicas, administrativas o profesionales pueden afiliarse a un sindicato y ejercer los derechos de negociación colectiva. Los empleados del sector público en los sectores estratégicos, según se designa en la nueva constitución, no pueden recurrir a medidas que paralicen esos sectores, tales como las huelgas. La constitución enumera los siguientes como sectores estratégicos: la salud; el saneamiento ambiental; la educación; la justicia; el cuerpo de bomberos; la seguridad social; la energía eléctrica; el agua potable y el tratamiento de aguas negras; la producción de hidrocarburos; el procesamiento, transporte y distribución de combustible; el transporte público; y el correo y las telecomunicaciones. En su mayoría, los funcionarios públicos mantuvieron su afiliación a

una asociación del sector laboral; no se permite que dichas asociaciones hagan huelga ni participen en negociaciones colectivas.

A pesar de la ley, los maestros, los trabajadores de las refinерías petroleras estatales y los trabajadores en una planta eléctrica realizaron huelgas durante el año. El sindicato de maestros convocó a huelgas intermitentes durante el año, últimamente del 15 de septiembre al 7 de octubre. En noviembre, los trabajadores hicieron protestas en una planta de generación de electricidad en Guayaquil durante una visita sorpresa del Presidente Correa. Correa dijo a los reporteros que haría investigar a los organizadores, de conformidad con el artículo del código penal que prohíbe la interferencia en la prestación de servicios públicos. Para diciembre, 22 empleados habían sido destituidos sumariamente, con la aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales, por interrumpir los servicios al público e "insultar la autoridad suprema del Presidente". El director de la compañía también solicitó al fiscal que acusara a los empleados de sabotaje y terrorismo. Al finalizar el año los trabajadores habían contratado a abogados para recusar las decisiones.

La nueva constitución, cuyas disposiciones sobre los derechos de los trabajadores requieren la aprobación de leyes para su ejecución, considera "irrevocables" los derechos de los trabajadores; contempla el derecho de sindicarse y de declararse en huelga (excepto en casos que pudieran "paralizar" sectores estratégicos); y compromete el apoyo estatal a los sindicatos democráticos.

El código laboral y la constitución exigen que a los trabajadores de las empresas estatales los represente un solo sindicato. La ley no exige la reincorporación de los trabajadores despedidos por causa de su actividad sindical pero sí exige indemnización y multas. La nueva constitución prohíbe la tercerización y el uso de criterios discriminatorios en la contratación. La tercerización incluye la subcontratación, terceras partes y contratos por hora. La ley prohíbe estas actividades excepto en materia de seguridad, servicios de comidas, servicios de mensajería y limpieza si esos servicios no son parte integrante de los procesos productivos de la empresa.

La ley autoriza contratos a tiempo parcial, pero con los mismos beneficios de los empleados a tiempo completo. Las empresas del sector público pueden subcontratar trabajadores técnicos con la aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales.

Hay pocas restricciones del derecho de huelga de los trabajadores del sector privado, a pesar de exigirse un período de 10 días antes de poder declarar una huelga. La ley permite hacer huelgas de solidaridad o boicoteos de tres días si el Ministerio de Relaciones Laborales los autoriza. En algunas industrias, durante una huelga legal, los trabajadores pueden asumir control de la fábrica o del lugar de trabajo (con lo que termina la producción en ese sitio) y recibir protección de la policía durante la toma de control. Sin embargo, en otras industrias, como la agropecuaria, la ley exige un período de espera de 20 días a partir del día de declaración de la huelga. Durante ese período, los trabajadores y empleadores deben ponerse de acuerdo con respecto al número de trabajadores necesarios para asegurar un determinado nivel de servicio y por lo menos 20 por ciento del personal debe seguir desempeñando sus funciones con el fin de prestar los servicios esenciales. La ley determina "la facultad del empleador de contratar personal sustituto" solamente cuando los huelguistas se nieguen a enviar el número de trabajadores necesarios para prestar los servicios mínimos necesarios, aunque en la práctica esta ley no se hizo cumplir. La ley protege a los huelguistas y a sus dirigentes contra represalias.

La ley no confiere a la mayoría de los empleados públicos el derecho de hacer huelga, aunque pudieron sindicarse y recurrir a la negociación colectiva. Los trabajadores individuales pueden elevar las quejas contra los empleadores ante la oficina de Inspección de Trabajos si están todavía empleados por la compañía, o ante los tribunales encargados de proteger los derechos laborales si ya no están empleados por la organización. Los sindicatos también pueden elevar las quejas a una junta tripartita de arbitraje (sindicato, empleador, gobierno) establecida para oír estas quejas. En diciembre, la comisión tripartita falló a favor del sindicato en el caso de los huelguistas en una empresa de fabricación de neumáticos. La ley

incluye una disposición por la cual los huelguistas del sector público se exponen a penas de encarcelamiento de 2 a 5 años.

De conformidad con una ley provisional aprobada en 2008, que exige la revisión de todos los acuerdos de negociación colectiva del sector público para excluir los "beneficios excesivos" de los trabajadores, al finalizar el año se habían revisado 64 contratos de negociación colectiva, afectando a aproximadamente 46.000 trabajadores. Entre los beneficios excesivos se encuentran la licencia con goce de sueldo para la capacitación profesional y en cuestiones sindicales o de derechos laborales; las bonificaciones por antigüedad en el cargo; vacaciones extras (devengadas por antigüedad); el derecho a servicios públicos gratuitos o con descuentos; y el derecho a tener una tienda, por mencionar algunos.

Un decreto presidencial firmado el 30 de abril autorizó a SENRES (Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público) a evaluar el empleo de los trabajadores en el sector público para determinar cuáles trabajadores entran en la categoría de trabajadores manuales y cuáles son clasificados como trabajadores técnicos o administrativos. Los trabajadores clasificados como técnicos y administrativos no estarán sujetos al Código de Trabajo sino a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCA). La LOSCA no proporciona garantías al derecho a la libertad de asociación ni a la negociación colectiva. Según una ONG especializada en promover los derechos de los trabajadores, un probable resultado de este proceso es que el 75 por ciento de los miembros sindicales en las empresas del sector público ya no podrán afiliarse legalmente a un sindicato ni tener un acuerdo de negociación colectiva. Los que trabajan en los sectores estratégicos ya no tendrán legalmente permitido hacer una huelga, aunque pueden participar en el proceso de negociación colectiva.

En agosto, el gobierno incorporó oficialmente a SENRES al Ministerio de Relaciones Laborales.

b. El derecho a sindicarse y negociar colectivamente

La ley exige que todos los empleadores privados que tengan 30 o más trabajadores afiliados a un sindicato negocien

colectivamente cuando el sindicato así lo pida. Los acuerdos de negociación colectiva abarcaban sólo a 140.000 trabajadores de una fuerza laboral de 4,3 millones. La mayor parte de la población económicamente activa estaba empleada en el sector agropecuario o en el sector informal urbano; esos trabajadores, en su gran mayoría, no estaban organizados. La ley permite a las empresas contratar individualmente a los trabajadores.

Existe una legislación especial que regula la mano de obra en las zonas francas. La mayoría de los trabajadores en zonas francas son contratados de forma temporal, y como tales no parecen estar protegidos por elementos clave del código laboral.

c. Prohibición del trabajo forzado u obligatorio

La ley prohíbe el trabajo forzado u obligatorio, incluso el infantil; sin embargo, hubo denuncias de trata de menores con fines de trabajo (véase la sección 6). El trabajo forzado de niños y adolescentes ocurrió con más frecuencia en los casos de trata de menores para las ventas callejeras o el servicio doméstico. Los tratantes a veces obligaron a las mujeres a dedicarse al servicio doméstico.

d. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para trabajar

La ley prohíbe la explotación de los menores en el lugar de trabajo y el trabajo forzado u obligatorio; sin embargo, el gobierno no hizo cumplir eficazmente la ley y el trabajo infantil continuó siendo un problema, especialmente en el sector informal.

El código laboral y el código de la niñez y la adolescencia y la nueva constitución fijan en 15 años la edad mínima para desempeñar todo tipo de trabajo y en seis horas diarias y cinco días por semana el número máximo de horas que puede trabajar un menor. La ley enumera los trabajos que no son apropiados para los menores y prohíbe que éstos trabajen en condiciones peligrosas, incluso en minas o en empleos que exijan exposición a sustancias tóxicas o peligrosas o ruidos fuertes. La ley exige que los empleadores paguen a los menores los mismos salarios que reciben los adultos por trabajos equivalentes. Las sanciones por infracciones de las leyes de trabajo infantil incluyen multas de

\$50 a \$300 para los padres o tutores, y multas de \$200 a \$1.000 para cualquier empleador que contrate a niños menores de 15 años. En casos de infracciones repetidas, se puede llegar a cerrar el negocio del empleador.

El Ministerio de Relaciones Laborales, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Tribunal de Menores tuvieron la responsabilidad de hacer cumplir las leyes de trabajo infantil, y aunque su aplicación siguió mejorando, no fue plenamente eficaz debido a la falta de recursos. La encuesta de trabajo infantil de 2006, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, reveló que 367.000 menores de cinco a 14 años desempeñaban trabajos no permitidos por la ley, principalmente en el sector informal de las zonas rurales, frente a 550.000 en 2001. Los niños trabajaban en la producción de bananos, flores, brócoli, caña de azúcar y fresas. También participaron en la fabricación de ladrillos y en la extracción minera de oro en pequeña escala. Se recibieron denuncias de niños ecuatorianos que trabajaban como recolectores de coca en Colombia.

Los 29 inspectores de trabajo infantil nombrados por el gobierno inspeccionaron lugares de trabajo que específicamente empleaban mano de obra infantil; esos inspectores estaban facultados para expedir citaciones por infracciones y sancionar a las empresas y a los empleadores cuando se comprobara que habían contratado mano de obra infantil ilegalmente. En enero el gobierno empezó la ejecución de una segunda fase de su Programa Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, apoyando iniciativas para combatir la mano de obra infantil en el trabajo doméstico, en la recolección de basura, en las minas, los mataderos, las fábricas de ladrillos y las plantaciones de flores y bananos. El objetivo era impedir que los niños y adolescentes trabajaran en estas áreas en 60 cantones de 16 provincias. Durante el año los inspectores realizaron 3.992 inspecciones de lugares de trabajo y sacaron a 2.056 menores que trabajaban en condiciones peligrosas, en contravención de las leyes laborales.

Si bien la Unidad de Servicio Social Laboral del Ministerio de Relaciones Laborales supervisó el trabajo infantil en algunas empresas como las fábricas, la aplicación de la ley en la mayoría de los sectores de la economía siguió siendo limitada.

En las zonas urbanas, muchos menores de 15 años de edad trabajaban en empresas de propiedad familiar en el sector informal lustrando zapatos, recogiendo y reciclando basura o en ventas ambulantes. Otros niños trabajaban en el comercio, los servicios de mensajería, el servicio doméstico o mendigaban. Algunos niños muy pequeños, de cinco o seis años, a menudo vendían periódicos o dulces en la calle para ganar su propio sustento o para aumentar el ingreso familiar.

El gobierno apoyó el Programa de Protección y Educación a Niños que Trabajan, que implementó un programa de talleres en comunidades indígenas en cinco provincias para trabajar con familias y escuelas sobre la problemática del empleo infantil.

El Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia señaló que el número de niños y adolescentes que realizaban trabajo infantil en 2008 disminuyó a 7 por ciento y el acceso a la educación aumentó a 78 por ciento.

e. Condiciones aceptables de trabajo

La nueva constitución exige una revisión anual del salario mínimo para homologarlo progresivamente con el costo de las necesidades básicas familiares. El Consejo Nacional de Salarios, organismo técnico del Ministerio de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, actúa como el brazo de negociación y arbitraje. Un organismo trilateral, integrado por representantes del ministerio, del sector privado y de los sindicatos, hace una revisión anual en diciembre y debe ser unánime en su decisión. El salario mínimo fue de \$218 mensuales, más una prima anual obligatoria equivalente a dos meses de salario, que en total no fue suficiente para que un trabajador con familia alcance un nivel de vida decente. La mayoría de los trabajadores sindicados en industrias estatales y en empresas privadas del sector formal devengaron ingresos considerablemente mayores que el salario mínimo y también recibieron otras prestaciones sociales importantes por medio de acuerdos de negociación colectiva. Sin embargo, en su mayoría, los trabajadores estaban empleados en los extensos sectores informal y rural, sin obtener el salario mínimo ni las prestaciones sociales establecidas por la ley.

La ley estipula una semana laboral de 40 horas y dos días consecutivos de descanso por semana. Si se exige que la persona

trabaje en exceso de la semana laboral establecida, los trabajadores deberán recibir pago por horas extraordinarias. Se fija una tasa de pago mayor por horas extraordinarias de trabajo nocturno. El máximo número de horas extraordinarias fue de 12 por semana que, por lo general, se respetó, excepto en compañías subcontratistas en las que se exigía a veces a los empleados que trabajaran hasta 28 horas extraordinarias por semana, y en el caso de algunos empleados domésticos. El Ministerio de Relaciones Laborales no desplegó suficientes recursos para hacer cumplir las leyes laborales.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está a cargo de aplicar las normas y los reglamentos de salud y seguridad. En el sector formal, la salud y la seguridad ocupacionales no representaron ningún problema importante. Sin embargo, no había ningún reglamento específico con respecto a normas de salud y seguridad en el sector agropecuario en pequeña escala, que constituye la gran mayoría de granjas y trabajadores. En la práctica, debido principalmente a la falta de inspectores laborales, no se hicieron cumplir las reglas de seguridad en las minas pequeñas que constituyen la gran mayoría de las empresas del sector minero.

La nueva constitución de 2008 protege a los trabajadores independientes que trabajan en áreas públicas, y prohíbe la incautación de sus productos o herramientas de trabajo, disposición cuyo objetivo es beneficiar a los trabajadores del sector informal, como los vendedores ambulantes.

La nueva constitución estipula que los trabajadores tienen derecho a un entorno laboral saludable y seguro. Un trabajador puede solicitar que un inspector del Ministerio de Relaciones Laborales verifique un peligro en el lugar de trabajo; acto seguido, ese inspector puede cerrar el lugar de trabajo. El tiempo de respuesta de los inspectores osciló entre tres días en las ciudades principales hasta períodos más prolongados en el campo. La ley no otorga a los trabajadores el derecho de retirarse del peligro en el lugar del trabajo antes de que se realice la inspección, a menos que el empleador esté de acuerdo.